

Honduras 2013

Golpe de estado, elecciones y tensiones del orden político

Esteban De Gori (ed.)



Serie Académica

Honduras 2013 : golpe de estado, elecciones y tensiones del orden político / Esteban De Gori ... [et.al.] ; edición literaria a cargo de Esteban De Gori. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sans Soleil Ediciones Argentina, 2015.
E-Book.

ISBN 978-987-45205-2-4

1. Sociología. 2. Política Latinoamericana. I. De Gori, Esteban II. De Gori, Esteban, ed. lit.

CDD 320.098

Obra editada bajo licencia Creative Commons 3.0:
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada
(by-nc-nd)

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Siempre que se utilice esta obra tendrá que reconocerse su autoría.

-© 2014, de los autores

-© 2014, de la edición, Sans Soleil Ediciones Argentina.

Se puede por tanto compartir esta obra siempre y cuando se respeten las condiciones de la licencia Creative Commons.

Diseño de la portada: Sans Soleil Ediciones

Maquetación: Sans Soleil Ediciones

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, <i>Esteban De Gori</i> ,	6
1. CRISE RIMA COM AMÉRICA CENTRAL: O JOGO QUE NÃO TERMINA EM HONDURAS E A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL, <i>Aleksander Aguilar</i>	8
2. EL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS TRAS LAS ELECCIONES DE 2013, <i>Natalia Ajenjo</i>	17
3. ESTADO DE DERECHO, ELECCIONES Y DEMOCRACIA EN HONDURAS: ¿HACIA UNA DEMOCRACIA PLURAL O HACIA UNA GOBERNABILIDAD AUTORITARIA Y TUTELADA?, <i>Marvin Barahona</i>	27
4. INTERPRETACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA Y EL PROCESO ELECTORAL DE 2013, <i>Álvaro Calix</i>	34
5. LA RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO EN HONDURAS: APRENDIZAJES PARA CENTROAMÉRICA, <i>ELVIRA CUADRA LIRA</i>	46
6. ZELAYA: DEL PALACIO A LA PLAZA, <i>ESTEBAN DE GORI</i>	53
7. HONDURAS: TESTIMONIO DE UNA RESISTENCIA, <i>KATIA LARA</i>	62
8. CRÓNICAS POLÍTICAS, <i>ARIEL MAGIRENA</i>	74
9. LOS PARTIDOS EN HONDURAS TRAS EL 2009: NUEVOS ACTORES, NUEVOS RETOS, <i>PATRICIA OTERO FELIPE</i>	80

10. PARTIDO LIBRE: FIN AL BIPARTIDISMO Y ¿AHORA QUÉ?, <i>MARIELA PINZA</i>	94
11. LA POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO “ENEMIGO INTERNO”, <i>KRISTINA PIRKER</i>	103
12. ¿DEMOCRACIA PARA LA SEGURIDAD DE QUIÉNES?, <i>SILVINA M. ROMANO</i>	112
13. VEINTE TOMAS DE LA PELÍCULA: ELECCIONES EN HONDURAS, <i>ALFREDO SERRANO MANCILLA</i>	121
14. HONDURAS ELECCIONES 2013: ENTRE EL TRIUNFO CUESTIONADO DE LAS FUERZAS GOLPISTAS Y EL AVANCE DE LA IZQUIERDA SUR- GIDA DE LA RESISTENCIA, <i>EUGENIO SOSA</i>	125
15. HONDURAS-EL SALVADOR: LA COMPLICIDAD DE LAS DERECHAS, <i>CARMEN ELENA VILLACORTA</i>	134
16. EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS EN HONDURAS, <i>SONIA WINER</i> ...	142

ESTADO DE DERECHO, ELECCIONES Y DEMOCRACIA EN HONDURAS: ¿HACIA UNA DEMOCRACIA PLURAL O HACIA UNA GOBERNABILIDAD AUTORITARIA Y TUTELADA?

Marvin Barahona

(marvinbarahona@yahoo.com)

Como se comentó apenas tres semanas después de las elecciones de 1981 –las primeras de la transición política que devolvió el poder a los civiles tras el largo y casi ininterrumpido mandato de los militares desde 1963–, el sentimiento predominante en la ciudadanía no era fácil de definir, pero se sospechaba que su componente principal era una “mezcla de esperanza, de temor, de optimismo y de duda”, para convertirse poco después en “desconfianza crítica” y un “escepticismo”¹ que, lentamente, cobraba conciencia del abismo existente entre el valor concreto del eslogan ganador y su situación socioeconómica presente y futura.

Pese a las más de tres décadas transcurridas, este comentario viene a colación por su semejanza con el estado de ánimo que prevalece en la ciudadanía hondureña a poco más de un mes de las elecciones generales de 2013, que dieron como ganador al neoliberal Juan Orlando Hernández, el más proclive de los candidatos hacia el militarismo autoritario y una democracia restringida. Pasada la euforia de unos y la frustración de otros por el triunfo del gobernante Partido Nacional –con poco más de un tercio del total de votos– la ciudadanía ha visto desfilar por

1 “Una gran responsabilidad en un momento difícil”, *Tiempo*, San Pedro Sula, 18 de diciembre de 1981, p. 6.

el Congreso Nacional una lista considerable de decretos que el presidente electo está haciendo aprobar –antes de asumir formalmente como mandatario– para allanar el camino hacia el modelo de gobernabilidad que tiene en mente, un hecho sin precedentes en los últimos treinta años de historia política. La pregunta a responder es: ¿Representan estos decretos, así como la conducta excesivamente triunfalista del presidente electo, un adelanto de lo que seguirá después? Las respuestas probables obligan a una visión retrospectiva sobre las pautas que se han manifestado con mayor claridad entre las preocupaciones relativas al Estado de derecho y la democracia en Honduras, por lo menos desde 1993.

Los primeros clarinazos estuvieron a la orden del día durante la campaña electoral: “Policía Militar será clave en mi gobierno: Juan Orlando Hernández”; y después de las elecciones, en la primera rueda de prensa: “Los triunfos no se negocian”. Estas dos afirmaciones, además de reflejar la orientación ideológica del presidente electo, revelan con claridad la sombra que más opacó a la política hondureña del siglo XX y el siglo actual: el autoritarismo y una voluntad casi mesiánica de los mandatarios de presentarse como única solución a las endémicas crisis nacionales.

Entre los electores, ahora pesimistas y atribulados, renacen los temores ante la posibilidad de tener un gobierno que pretende resolver el desequilibrio fiscal con draconianas medidas impositivas y enfrentar la inseguridad ciudadana con un Estado policial, para responder así a dos temas cruciales para el Estado y la sociedad hondureña. Por el momento, el presidente electo –que según los datos oficiales recibió más del 60% de desaprobación en las urnas– se empeña en crear condiciones favorables para un mandato expedito, enfocado a utilizar “políticas de shock” similares a las practicadas por el gobierno del también nacionalista Rafael Callejas (1990-1994), que introdujo medidas de ajuste estructural para entonar con las políticas

neoliberales ya aplicadas en otras naciones latinoamericanas.

Este nuevo gobierno responde genéticamente a los gobiernos nacionalistas precedentes –tres en total–, en cuyas administraciones se encuentran las claves que sustentan las políticas que este comienza a implementar sin mayores preámbulos: paquetes de ajuste fiscal y medidas económicas cargadas de inequidad y propensas a profundizar las enormes desigualdades sociales y económicas ya existentes; políticas de “seguridad ciudadana” con rasgos de doctrina de seguridad nacional que solo fortalecen la militarización social y una derivación fundamental: la creciente militarización de lo político. De seguir estas tendencias, el nuevo gobierno podría cosechar resultados similares a los que obtuvieron sus antecesores nacionalistas en los periodos 1990-1994, 2001-2005 y 2010-2013, que se resumen en un incremento acelerado y desproporcionado de la inequidad social; la estigmatización de segmentos de la población identificados como “enemigos principales” por la política de seguridad, y –lo que ya comienza a verse– un súbito aumento de la conflictividad social y la desaprobación popular de las políticas económicas y fiscales.

Importa destacar, desde una perspectiva menos coyuntural y más estructural de estos problemas, que las medidas de política y las decisiones ya tomadas por el presidente electo apuntan hacia una consolidación del *statu quo* basado en dos factores clave: 1) el mantenimiento de una política de privilegios a favor de los grupos de interés identificados con las minorías oligárquicas para salvaguardar el usufructo de un poder absoluto desde el Ejecutivo; y 2) el mantenimiento de las viejas estructuras y del estilo de ejercer el poder establecidas y perfeccionadas por el bipartidismo en un esfuerzo supremo por mantener su hegemonía, amenazada por el descontento popular y el multipartidismo que despuntó en las elecciones de 2013 y que ahora se percibe como alternativa. Ambos factores dejarán intacto el

sistema clientelar entronizado por el bipartidismo y la sistémica corrupción que corroe la institucionalidad estatal, como lo demuestra el hecho de que ninguno de los nuevos decretos aprobados por el Congreso Nacional apunta a erosionar estos dos males endémicos.

Al rehuir un compromiso decidido con el combate al clientelismo político y a la corrupción pública –como parece ser la tendencia– a la vez que se aumentan los impuestos directos y se promueve la militarización, el nuevo gobierno demuestra ser más proclive a la reforma administrativa para aumentar su eficacia en rubros como la tramitación de concesiones a favor del capital transnacional para explotar los recursos naturales y hacer realidad el acariciado sueño del nuevo mandatario de conceder grandes porciones del territorio nacional a inversionistas extranjeros para establecer “ciudades modelo” o “zonas especiales de desarrollo”. Y todo lo anterior irá en detrimento de una reforma sustantiva de la institucionalidad dirigida a fortalecer el Estado de derecho y la democratización social.

En un plano temporal más extenso, si en la década de los 90 se presentó una coyuntura favorable a los cambios institucionales que buscaran resolver los conflictos “democracia versus militarismo” y “democracia versus corrupción”, para transformarlos en “democracia-civilidad” y “democracia-transparencia”, en la actualidad se observan marcadas tendencias a devolver esos conflictos a sus orígenes, al obviar premeditadamente los debates y lecciones asimiladas por Honduras en esta materia desde 1993, lo cual representaría un retroceso de veinte años para la democratización social y un freno sustantivo al fortalecimiento del Estado de derecho. Esto no solo amenaza los avances logrados con sacrificio y a cuentagotas en el pasado reciente, sino también el naciente pluralismo político, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

Sin disminuir el peso y el enorme potencial de incidencia que

los factores antes señalados tendrán sobre el nuevo gobierno, la administración entrante enfrentará un problema de mayor envergadura aún: la legitimidad y la legalidad de sus acciones y decisiones. Aunque el problema es de larga data y sus antecedentes más cercanos se sitúan en el golpe de Estado de 2009, la conducta del nuevo mandatario, cuando aún fungía como presidente del Congreso Nacional, contribuyó –para el caso con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, y la aprobación nuevas leyes lesivas a la soberanía territorial– a la pérdida de legitimidad de sus acciones por la práctica de una legalidad viciada y ampliamente desaprobada por diversos sectores políticos y sociales y una sociedad civil cada vez más vigilante.

El punzante como decisivo conflicto por la legitimidad y la legalidad encontró asidero al nomás concluir las recientes elecciones, cuando otros candidatos y partidos se negaron a reconocer el triunfo del candidato nacionalista, o lo consideraron espurio. Los titulares de prensa de esos días así lo confirman: “Nasralla solicita el recuento de actas”; “Libre rechaza resultados del TSE [Tribunal Supremo Electoral] por desconfianza”; “Darán informe exacto de las denuncias de delitos electorales” (Ministerio Público); “Llaman a presidenciables a respetar los resultados” (G-16); “Mel no reconoce resultados del TSE”². Y aun dos días antes de las elecciones el editorial de diario *Tiempo* se refería a “peligros de sublevación por denuncias de fraude” y agregaba que “La ocurrencia de un resultado ilegítimo ya no tiene lugar en la tolerancia colectiva...”; argumentando que la ilegitimidad en este contexto no era relativa únicamente a la votación, sino que “comprende las prácticas vergonzosas mediante las que, por las vías del amedrentamiento y la compra de

2 Véase: *Tiempo*, San Pedro Sula, 26 de noviembre de 2013, pp. 10, 13 y 28; y, *El Heraldo*, Tegucigalpa, 26 de noviembre de 2013, primera plana.

votos, se pretende aventajar el resultado final”, hasta concluir en que todavía queda por resolver la cuestión “del dinero sucio circulando a torrentes en procuración de votos...”.

Y dos días después de las elecciones, confirmando las sospechas generalizadas de adulteración de los resultados electorales en “la contada”, el editorial del mismo cotidiano se refirió a “mecanismos ilegales de manipulación de datos” y estimó que el porcentaje manipulado podía llegar hasta un 30 por ciento de la suma total de votos, en un proceso electoral controlado en su totalidad por el bipartidismo gobernante y su acreditada experiencia en esta materia. En este contexto de descrédito, corrupción pública y legalidad a medias, el cuestionamiento a la legitimidad y la legalidad seguirán menoscabando la credibilidad del nuevo gobierno y erosionando los ya desgastados fundamentos del Estado de derecho, amenazando, además, con transformarse en el problema político esencial para la democracia hondureña en la nueva coyuntura política abierta por las elecciones de 2013. Estas elecciones cerraron así el ciclo iniciado en 1980 con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y a elecciones generales en noviembre de 1981, con un saldo negativo para la legalidad, la legitimidad y la imparcialidad que deben caracterizar a los procesos electorales.

El sentido y el significado de estas tendencias y hechos resultan más comprensibles cuando se les considera desde una perspectiva de larga duración en la que ya habían sido auscultadas y hasta previstas en su desenvolvimiento temporal; es el caso del pronóstico hecho en el decenio de 1990 por el economista jesuita Xavier Gorostiaga quien, partiendo de la situación de “incertidumbre, perplejidad e inseguridad” que vivía Centroamérica en aquel momento, preveía una descomposición del tejido social, el incremento de la inseguridad urbana, una mayor dependencia de lo externo y exclusión interna, una mayor desintegración social bajo formas modernizantes y democráticas

cada vez más superficiales, y el tráfico y producción de drogas sustituyendo a las economías de postre.

Su vaticinio, que abarcaba hasta el año 2015, anunciaba, entre otros: a) una mayor inseguridad ciudadana y un tensionamiento social que exigirían el establecimiento de “gobiernos fuertes” con gastos crecientes para mantener la seguridad ciudadana con formas de seguridad privada, lo que haría crecer la proporción del PIB destinada a la seguridad; b) los Estados se transformarían en simples proveedores de servicios administrativos y diplomáticos que requieren la modernización y la globalización; c) la antigua “triple alianza” conformada por la oligarquía tradicional, los militares y los Estados Unidos se reconstituiría como una “democracia restringida y tutelada”; d) en la economía se produciría la “taiwanización de enclaves modernizantes” en la industria, finanzas, comercio y sectores agrícolas no tradicionales; e) una “pobreza extendida y una riqueza concentrada”. Esta predicción se ha cumplido al pie de la letra en la Honduras de las dos últimas décadas, y el nuevo gobierno parece encaminarse a completar lo poco que aún queda por hacer en esta agenda neoliberal para Centroamérica.

Marvin Barahona es historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de *Evolución histórica de la identidad nacional*, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y *Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica*, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.